

EL EJÉRCITO COMO ACTOR POLÍTICO

Cambio de sitio. El desafortunado rumor que recorrió los centros financieros del mundo el viernes pasado -la posibilidad de un golpe de Estado en México-, hizo evidente que, como resultado de la crisis de los modelos económico y político vigentes, el ejército se ha trasladado del espacio político marginal que ocupó por decenios, a un sitio peligrosamente cercano al centro mismo de la toma de decisiones. Lo deseable sería que ese peculiar instrumento del Estado -la fuerza armada- retornara a su sitio tradicional lo más pronto posible. Sin embargo, lo anterior requiere que otras instituciones -en particular la presidencia, el Congreso y los partidos- asuman plenamente la responsabilidad que les corresponde en este largo y contradictorio proceso de transición política.

Como todos sabemos, el viernes tres, justo faltando siete minutos para las diez de la mañana, una agencia internacional de noticias, envió a los cuatro puntos cardinales un despacho donde se registraba, como rumor, la posibilidad de que Ernesto Zedillo estuviera negociando con los altos mandos del ejército su renuncia a la presidencia, y que un militar quedase al frente del país en tanto se convocaba a nuevas elecciones. A base de desmentidos de la Secretaría de la Defensa aquí y de la Casa Blanca allá en Washington, y de la observación directa de la realidad, se pudo acabar con el rumor, pero no antes de que el peso mexicano quedara tendido en la lona, pues aunque

finalmente cerró a N\$ 7.50 por dólar, horas antes había llegado a los N\$ 8.00.

Un historiador y observador agudo de los procesos políticos y económicos actuales, Emilio Zebadúa, sostiene que la crisis económica de México se debe a un abuso de la ortodoxia en ese campo (*La Jornada*, 4 de noviembre). Creo que tiene razón, pero por otro lado, el que en el exterior se haya dado credibilidad al rumor del golpe militar, se debe justamente a lo contrario: a que en materia de relaciones presidencia-ejército tanto Ernesto Zedillo como el ejército, se apartaron mucho y demasiado rápido de la ortodoxia y crearon un problema que pudiera no ser fácil de resolver. En efecto, fue la desafortunada combinación de una crisis económica tan profunda como persistente, con el empantamiento de la negociación política y un mal manejo de la relación pública entre el presidente y la Secretaría de la Defensa, lo que hizo posible que el irresponsable rumor propalado por las agencias extranjeras fuera tomado por cosa cierta en los centros financieros internacionales.

Lo ocurrido el 3 de noviembre es un indicador del grado de deterioro que ha sufrido la imagen externa del gobierno mexicano, pues de lo contrario no es comprensible que por unas horas las siempre bien informadas instituciones financieras internacionales -de su correcta información dependen miles de millones de dólares- aceptaran que el régimen más estable de América Latina en el siglo XX terminara sus días víctima de una

acción tan poco moderna y desprestigiada en el mundo postcomunista, como un golpe militar.

Un Poco de Historia. El Ejército nació en la Nueva España relativamente tarde -en la segunda mitad del siglo XVIII-, y su creación fue una reacción de los virreyes a las amenazas británicas sobre la colonia. Fue este un ejército pequeño y sin mayor significado político, pero todo cambió abruptamente al estallar la guerra de independencia, pues el conflicto interno colocó al ejército como el factor central de poder. La situación no cambió al concluir la independencia, al contrario, y el general Santa Anna se convirtió, para desgracia del país, en el *factótum* de la política. Sólo las presidencias fuertes de Benito Juárez primero y Porfirio Díaz después, pudieron desplazar al ejército del centro del sistema político y subordinarlo plenamente al poder Ejecutivo.

La Revolución de 1910 devolvió inesperadamente al ejército su viejo papel como actor político central, pero resulta su acción como conductor de los destinos nacionales volvió a ser desastrosa: el golpe militar del general Victoriano Huerta en febrero de 1913 se tradujo en una política tan corrupta como simplista, y en vez de acabar con la revolución, los militares en el poder terminaron por incendiar a todo el país. La derrota de los golpistas a manos de ejércitos populares fue de proporciones tales, que el ejército federal simplemente desapareció. Pero si el ejército del viejo régimen dejó la escena política en 1914 por la vía de los tratados de

Teoloyuca, el nuevo el ejército -el revolucionario-, se mantuvo como la institución política central hasta que poco a poco el partido de Estado lo fue reemplazando como base del nuevo régimen.

En diciembre de 1940 el general Manuel Ávila Camacho decidió eliminar el sector militar del partido de Estado -que bajo el cardenismo se había transformado en un partido de masa- y lo declaró apolítico. El clima creado por la II Guerra Mundial ayudó a modernizar y profesionalizar a las fuerzas armadas, y a volverlas a colocar en el lugar en que se encontraban antes de noviembre de 1910. Ayudó mucho a consolidar el proceso anterior el que después de 1945 dejara de existir la posibilidad real de que el ejército militar profesional -enfrentar a Estados Unidos era impensable y a Guatemala y Belice innecesario. A partir de entonces, la fuerza de las instituciones políticas civiles mexicanas se impuso un bajo perfil a las relaciones públicas entre la presidencia y el ejército, aunque por otro lado obligó a que el secretario de la Defensa no fuese un civil como en el caso en los sistemas políticos modernos sino un general, y a que de tarde en tarde otros generales ocuparan gubernaturas y siempre hubiera una representación militar en el Congreso.

El Cambio. En presidente Ernesto Zedillo es un economista profesional inocente en materia de alta política y al que le tocó hacerse cargo de la conducción de la nave del Estado mexicano en una época de tormenta. Quizá fue esa inexperiencia política, combinada con lo extraordinario de la coyuntura -la

gran crisis económica y política-, la que le llevó a mostrar prácticamente desde el inicio de su mandato una predilección por aparecer en público con los mandos militares que, por definición, son la imagen misma de la fuerza. Además, en febrero de este año, el presidente decidió hacer depender la solución de la rebelión indígena en Chiapas más de la acción directa de la Secretaría de la Defensa y menos en la de la Secretaría de Gobernación, pese a que ahí estaba el hombre de todas sus confianzas -Esteban Moctezuma- y a que el problema chiapaneco era y sigue siendo, un problema fundamentalmente político y social, y no militar.

La debilidad presidencial coincidió con una Secretaría de Gobernación casi ausente y con general secretario de la Defensa que parece más decidido que sus antecesores a jugar la carta del activismo político. Posiblemente ese activismo en una coyuntura política tan incierta como la actual, obedezca en parte a que en el pasado reciente el ejército fue obligado a pagar algunos de los grandes errores de los civiles. Es quizá por ello que las instituciones militares -la marina ya se animó a entrar en el juego- parecen más decididas a permanecer (¿vigilar?) cerca de los responsables de la formulación de la política.

En efecto, hace más de un cuarto de siglo la torpeza y autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz llevaron a que el ejército tuviera que sacarle al sistema las castañas de un fuego que el propio presidencialismo había prendido pero que no había

sabido controlar y represión política del 68, fue la guerra de guerrillas de los años setenta; otra vez el ejército fue el instrumento de los políticos para resolver el problema por medio de una "guerra sucia" cuya memoria mantiene viva hoy doña Rosario Ibarra y cuya esencia fue captada en toda su brutalidad por Carlos Montemayor en su libro *Guerra en el paraíso*. Finalmente, el neoliberalismo salinista también le pasó al ejército una factura que deberían de haber pagado los tecnócratas. El salinismo, que marginó a todos los que consideró inmodernizables -desde empresarios que no podían exportar hasta indígenas-, que puso los instrumentos de seguridad en manos de un mexicano de factura reciente -José Córdoba-, y que se negó a enfrentar a tiempo el problema de Chiapas, llevó a que cuando el problema pospuesto finalmente estalló en la forma de levantamiento zapatista, fuera el ejército y no los prepotentes tecnócratas, el que tuviera que retomar a Ocosingo a sangre y fuego. Y esa toma produjo una cascada de imágenes de guerra -soldados contra indígenas- que en cuestión de horas le dio la vuelta al mundo.

¿Un Remedio Peor que la Enfermedad?. Es comprensible que un ejército de 175 mil hombres (cifras de 1994) que se precia de su origen revolucionario y popular, busque evitar que se repitan los errores del pasado, y que por ello siga hoy muy de cerca las acciones de una clase política que en el último cuarto de siglo ha fallado una y otra vez. Sin embargo, es necesario evitar que los altos mandos militares cometan el

mismo error de los tecnócratas: subestimar la complejidad de la política. En efecto, la política es una actividad que requiere del manejo delicado y sutil de muchas variables, y que algunos de los militares metidos a políticos muestran que no les es fácil dominar ese arte; y para muestra un par de botones recientes: Graciliano Alpuche en Yucatán y Absalón Castellanos en Chiapas. Hoy, cuando el poder presidencial ha disminuido sin que surja el que lo ha de sustituir, no es buena idea que el *stablishment* militar busque tan seguido la luz de los reflectores, como cuando invitaron al secretario de Defensa de los Estados Unidos en una especie de TLC militar o cuando se decidieron a opinar públicamente sobre la Alianza para la Recuperación Económica el día último de octubre. Esas acciones dan pie a que se piense que el activismo es producto de las instituciones civiles, en particular de la presidencia.

En materia de relaciones ejército-presidencia, lo más saludable para el proceso político mexicano en tiempo de transición es, retornar a la ortodoxia y preservar el bajo perfil de las fuerzas armadas.